

El discurso se ha concentrado demasiado en proponer una ciudadanía abstracta de corte ilustrado, infinitamente menos atractiva, incluso menos verosímil, que las vías conocidas para salir de abajo a través de un golpe de suerte o un contacto afortunado.

La cuestión cultural y política de la sociedad civil en Venezuela

RAÚL GONZÁLEZ FABRE

Una definición básica

La expresión «sociedad civil» designa, en nuestra concepción actual, el intento de mantener organizaciones sociales autónomas frente a los poderes determinantes de la vida nacional, especialmente si esos poderes se estructuran verticalmente y admiten mal la pluralidad dentro de sí. Cuando tales poderes se concentran en la Iglesia, civilismo se opone a clericalismo. Cuando las Fuerzas Armadas son las que tienen vara alta en una sociedad, civilismo se opone a militarismo. Y cuando son los partidos políticos los que cerradamente controlan el aparato del Estado, civilismo se opone a partidocracia.

Esta última es la situación desde la que se ha definido recientemente la sociedad civil en Venezuela. Nuestra sociedad civil está conformada por numerosas organizaciones y redes de organizaciones sociales que pretenden actuar en el ámbito de lo público manteniendo su autonomía respecto a los grandes partidos, a los poderes públicos que ellos controlan y a las organizaciones

sociales (tales como asociaciones de vecinos, sindicatos o gremios) que responden a las líneas emanadas de algún CEN.

En nuestra sociedad civil se encuentran incluidas muchas organizaciones eclesiales y otras de origen e inspiración cristiana, puesto que la Iglesia no sostiene una pretensión hegemónica sobre la vida venezolana ni organiza sus relaciones con el resto de la sociedad por una disciplina vertical. La antinomia civilismo-clericalismo no es significativa en la Venezuela de hoy.

Por otra parte, vemos con sorpresa que puede haber un giro hacia la antinomia civilismo-militarismo que, merced a don Rómulo Betancourt, dábamos por definitivamente resuelta en la república moribunda. Este punto puede incluso cambiar en los próximos años el concepto de sociedad civil que ahora sostenemos.

En todos los casos, sea quien sea el que pretenda dominar el poder del Estado para establecer una hegemonía sobre la vida nacional, la idea de sociedad civil se opone a la de estatalismo, y sostiene

más bien el principio de subsidiaridad: el Estado no debe tomar para sí funciones que puedan realizarse mejor o igual desde organizaciones sociales autónomas. Esta postura no se asume por principio, ya que cabría pensar en un Estado de gran presencia en la vida nacional y al mismo tiempo capaz de integrar dentro de sí la pluralidad social sin arrasarla. El socialismo democrático no es inconcebible en abstracto. Pero en las circunstancias concretas de nuestra cultura política, ciertamente el mejor modo de evitar una hegemonía sobre la sociedad es que no pueda establecerse ni aún controlando el poder del Estado, por lo cual conviene contener ese poder tanto en extensión como en profundidad de penetración social.

Con estas ideas no queda, sin embargo, bien definida la identidad de la sociedad civil en Venezuela. Por el contrario, no hemos hecho más que delimitar un territorio donde hay de todo, un universo de contradicciones algunas de las cuales vamos a tratar de delinear a continuación.



Marcha en Caracas, Septiembre de 1999

Las contradicciones

El debilitamiento del Estado venezolano de partidos y de los partidos mismos ha conducido a una relativa proliferación de pequeñas y medianas organizaciones sociales que no responden a disciplina partidista ninguna. Estas organizaciones se definen ideológicamente por una serie de rasgos comunes en sus objetivos: incremento y reconocimiento de la pluralidad social, reconciliación del interés particular con el colectivo, participación ciudadana en la gestión pública, transparencia del Estado, eficiencia en la prestación de servicios, defensa de los derechos humanos, constitución de una ciudadanía efectiva regida por la ley, reformas electoral y judicial para romper el bloqueo partidista, paso de una economía rentista a una productiva...; y también por algunos rasgos de su método: autonomía política, participación horizontal en la toma de decisiones, profesionalismo en la gestión, burocracias livianas, interconexión en redes locales e internacionales, presencia en los me-

dios de comunicación social, uso de los recursos disponibles para hacer valer la ley existente...

Como podrá notarse, esta ideología incluye muchos de los elementos básicos para la regeneración democrática del país, aunque no los agota.

Vamos a sostener aquí dos tesis críticas respecto a la sociedad civil venezolana, tal como la percibimos en su realidad concreta:

- Que esa ideología puede estar degradándose en la práctica, como resultado de las dificultades para mantenerla consistentemente en nuestra cultura política.
- Que esa ideología es insuficiente para atraer al pueblo venezolano, y que tal insuficiencia no es accidental, sino que está relacionada con la extracción social de los líderes de las organizaciones de la sociedad civil.

Degradación de la sociedad civil

Las variantes de la degradación en organizaciones de la sociedad civil son múltiples, si se entiende por ella no la

corrupción como saqueo de las arcas, ni la traición a la autonomía y venta a los partidos populistas de viejo o nuevo cuño. Ambas cosas son más bien excepcionales: aunque se oiga a veces de casos concretos, ciertamente no se repiten tanto como en el sector empresarial o en torno a los partidos, incluso los pretendidamente renovadores. La degradación que nos interesa consiste en la negación en la práctica de lo que se dice pretender en las palabras, una degradación ideológica.

En esta materia encontramos de todo. Hay organizaciones que defienden intereses particulares irreconciliables con los colectivos, como es el caso de aquellas asociaciones de vecinos, todo lo participativas que se quiera, cuya primera acción consiste en cerrar vías públicas con albalas privadas. La defensa abierta de intereses de localidad o de clase frente al interés general, conduciría a una estructuración oligárquica de la sociedad aún más dura que la actual. Así el proclamado pluralismo se nos volvería algún tipo de neofeudalismo.



Resulta tan difícil sostener una organización intermedia en una sociedad desarticulada, con una tradición y unos hábitos organizativos muy pobres, que la odisea de los fundadores parece consagrarlos a menudo como héroes intocables.

Por otra parte, no es raro tampoco encontrar la sustitución del método participativo de decisión y gestión por el personalismo. Resulta tan difícil sostener una organización intermedia en una sociedad desarticulada, con una tradición y unos hábitos organizativos muy pobres, que la odisea de los fundadores parece consagrarlos a menudo como héroes intocables. Las dificultades para resolver sin ruptura las disensiones dentro de las organizaciones y para trabajar junto con otros sin pretender protagonismo, son síntomas frecuentes de esta corrupción. Como el modo de producción condiciona el producto, resulta difícil que de una manera no participativa de promover la participación vaya a brotar una cultura política realmente más participativa.

Este asunto del personalismo a lo interno va ligado al hecho de que nuestra sociedad funciona de hecho en el ámbito público como una red oligárquica de relaciones personales, no como una estructura abstracta regida por la ley. No sólo en su funcionamiento interno sino también en sus relaciones con el Estado o con otros centros de poder, muchas organizaciones autónomas recurren a esa red de relaciones (en la que no suelen estar mal ubicadas, sea por la presencia en ellas de personas de extracción social media-alta o alta, sea por la de clérigos, periodistas o de personajes que han alcanzado relevancia política) para obtener resultados que, fríamente analizados, dependen de privilegios legales o administrativos. Esto resulta en cierta medida inevitable si uno va a actuar con éxito en esta socie-

dad, pero desde luego contradice la pretensión de alcanzar un arreglo social regulado por una ley ante la que todos seamos iguales. Al fin, podríamos estar reproduciendo la lógica por la que los bien conectados pasan por encima de los no tan bien conectados, con la única diferencia de que las conexiones se hagan ahora a través de organizaciones autónomas en vez de a través de los partidos.

Por último, mencionaremos el drama de las ONGs de servicios sociales, que a menudo bailan al ritmo de sus fuentes de financiamiento nacionales o internacionales, cambiando de objetivos, o disolviéndose y refundándose con los mismos personajes, según cambian las prioridades de los programas sociales del Estado o de las agencias internacionales que las financian. La idea de un servicio nacido de la percepción de las necesidades nacionales es reemplazada aquí por la de un negocio (al menos para el mantenimiento de su staff profesional) regido por la voluntad de sus verdaderos clientes, que ya no responde al pueblo por convicción sino a los financistas por conveniencia. Un estudio reciente conducido por la Dra. Mercedes Pulido en el Centro Gumilla ha mostrado que el 70% de las más de doscientas organizaciones autónomas analizadas cambiaron sustancialmente de objetivos o desaparecieron en menos de diez años, siguiendo dinámicas económicas pautadas desde afuera.

A esto corresponde una considerable pérdida de transparencia respecto a la sociedad y unas relaciones poco claras con las agencias financiadoras. Puesto que la abrumadora mayoría de las organizaciones autónomas surgidas en los últimos años son gestoras de servicios sociales, y puesto que aun las que no lo son rara vez alcanzan a financiarse de sus participantes y de sus actividades, este asunto afecta a la sociedad civil en su conjunto, no sólo a un sector de ella. Organizaciones tan volátiles difícilmente pueden consolidar una nueva cultura política o de gestión de lo público.

Insuficiencia de una ideología de la ciudadanía abstracta

Y si en estos tópicos que hemos señalado, la práctica se separa de la propuesta ideológica de la sociedad civil, debemos entrar ahora en un punto clave sobre la propuesta misma: el de la insuficiencia de una ideología de la ciudadanía

abstracta como la que proyectan los voceros de la sociedad civil con más presencia mediática.

El punto de partida del análisis se encuentra en la constatación de que estas organizaciones siguen siendo muy minoritarias, pese al desplome de sus competidores inmediatos: los partidos políticos populistas. Yo me atrevería a decir que el partido Acción Democrática, con toda su postración, posee aún más capacidad de convocatoria que todas las organizaciones autónomas juntas, no digamos capacidad política. Y, lo que es peor, la decadencia de este partido y sus clones ha llevado a un reencuadramiento afectivo de la gente en torno a nuevas organizaciones políticas populistas, de corte caudillista todavía más acusado y de cultura política tanto o más primitiva.

Este giro popular inesperado hasta cierto punto, nos hace pensar que el país se parece a un barco con el lastre suelto. Nuestro pueblo va dando bandazos emocionales, que luego se vuelven electorales, sin que nadie alcance a ponerle rumbo coherente. El trabajo paciente de construir nuevas formas institucionales es barrido, antes de que alcance a fraguar, por movimientos tempestuosos que enlazan directamente con las ansias más profundas de la población. Así se nos fue la reforma utópica y soberbia de Carlos Andrés Pérez, así se voló la lenta orfebrería de cambios consensuados que propició Caldera y por ahí estará amenazada también la Quinta República, si es que llega a trazar una vía verosímil de futuro, lo que aún está por ver.

No es raro que a las organizaciones autónomas les parezca en ocasiones estar arando en el mar, puesto que ni siquiera desde el poder del Estado puede conservarse la estabilidad suficiente para desarrollar proyectos reformistas de alcance nacional hasta recoger los frutos. Mucho más difícil es hacerlo desde la participación ciudadana, como ustedes saben bien. Y téngase en cuenta que las escasas reformas que han gozado de esa estabilidad, como la descentralización, en efecto han sido fructíferas. Pero muchas más se han quedado en el aparato.

No queremos con ello decir que la propuesta ideológica de la sociedad civil no haya hecho camino. Al contrario, ha caminado mucho, sobre todo entre las clases medias profesionales, cuyo pen-

samiento ha conseguido influir aunque ello no haya supuesto una incorporación de las personas a las organizaciones. El problema se encuentra en que Venezuela está dividida por una aguda brecha social, y lo que ocurra en las cabezas del lado minoritario de la brecha no basta para cambiar el volátil sentir de las mayorías.

La existencia de la brecha es evidente. Sólo mencionaré algunos de sus elementos. Según una investigación sobre la pobreza en Venezuela realizada por Matías Riutort (UCAB), la pobreza total se ha duplicado entre 1982 y 1997 (de 33,5% de la población a 67,2%), mientras la pobreza crítica se ha más que triplicado en el mismo período (de 11,0% a 36,3% de la población). O sea, que antes de Chávez ya teníamos más de un tercio de la población pasando hambre, mientras las camionetas de lujo que ruedan por Caracas testimonian cómo las clases medias-altas para arriba no lo han pasado tan mal.

Pero el problema no es sólo de ingreso. En esos quince años, la capacidad de las instituciones, tanto estatales como empresariales, para incorporar a la población ha disminuido palpablemente: más niños fuera de las escuelas, más trabajadores desempleados o subempleados, más enfermos en las consultas de los brujos, más barrios bajo control del hampa.

Por fin, está la acentuación del apartheid social: pobres y clases medias no se encuentran en Venezuela más que en posiciones de subordinación o de amenaza. Las urbanizaciones levantan barreras físicas; la educación y la salud pública quedan sólo para los pobres, mientras los demás se resuelven con sistemas privados inaccesibles para las mayorías; el servicio militar es para unos y no para otros; hasta en las playas, los centros comerciales y los cines llegó a haber segregación de hecho. En suma, los pobres para ser algo a los ojos de las clases profesionales tienen cada vez más que ocultar su situación social, negar su cultura de origen y, última-mente incluso, pedir perdón por su raza. Da la impresión que sólo nos quedan las telenovelas como lugar de encuentro masivo entre las formas de vida de pobres y ricos. Poco pegamento parece para una sociedad.

En estas condiciones, se comprende que el anhelo mayor de las clases populares sea la integración social: volver a tener

un lugar en esta sociedad, salir de los márgenes, obtener participación efectiva y no sólo formal en la vida económica, en los servicios sociales, en las dinámicas de la ciudad. Esa es la promesa que los encuadra en los partidos populistas de viejo y de nuevo cuño.

Y ese es el anhelo que no encuentran reflejado en el discurso de la sociedad civil, aunque esté bien presente en las prácticas de las organizaciones autónomas que trabajan en zonas populares. El discurso se ha concentrado demasiado en proponer una ciudadanía abstracta de corte ilustrado, infinitamente menos atractiva, incluso menos verosímil, que las vías conocidas para salir de abajo a través de un golpe de suerte o un contacto afortunado. Y ahí radica la insuficiencia de que hablábamos en nuestra segunda tesis.

No es que la propuesta de poner en vigor el Estado de derecho y de crear una conciencia ciudadana participativa no vaya en la dirección de la integración social. Va en parte, puesto que evidentemente los mayores ganadores de que el Estado funcione legalmente serán los pobres, aquellos que hoy deben pagar con pérdida de sus derechos los privilegios de otros. Pero va sólo en parte, porque se presenta desde el lado próspero de la brecha social, respondiendo sin diálogo cultural a las motivaciones, a las posibilidades y al lenguaje de las clases profesionales. Cuando llega el momento de la verdad, la gente espera ver aliarse a los voceros de la sociedad civil antes con los privilegiados del sistema anterior, a los que pertenecen sociológicamente, que con ese pueblo al que ni siquiera llaman por su nombre. El último espasmo kafkiano de la candidatura de Salas Römer confirmó esa percepción para muchos.

Conclusión

Todo esto no debe ser entendido como una acusación de mala fe hacia las organizaciones de la sociedad civil, sino sólo como una llamada de atención sobre un punto central: cualquier futuro viable para el país pasa por rearticular la sociedad incluyendo de nuevo a las mayorías en ella. Si quieren ser una alternativa real de movilización, las organizaciones autónomas deben no sólo seguir actuando en línea de integración social, y hacerlo de forma más coherente, eludiendo las contradicciones de

nuestra primera tesis. Deberán, además, reelaborar su discurso para mostrar con claridad que no proponen un esquema de participación abstracta al que sólo tendrán acceso los que ya pueden participar donde quieren, sino que en esa participación habrá también un lugar a la medida de los pobres al que incorporarse como ellos son, para ir haciendo camino político, social y cultural junto con los profesionales.

Esta es la lección que queda de los últimos quince años de florecimiento de organizaciones autónomas, rematados por el fracaso de sus candidatos a la Asamblea Constituyente: La sociedad civil deberá ser un lugar real de encuentro entre clases sobre bases de igual, dignidad y respeto a las diferencias culturales; con el propósito de cerrar la brecha social, o los candidatos de la sociedad civil competirán indefinidamente entre ellos por los votos de las clases medias y altas, mientras el destino del país quedará en manos de quien sepa ilusionar al pueblo, no importa con qué mentiras.

RAÚL GONZÁLEZ FABRE

Jesuita, ingeniero, doctor en Filosofía

Nuestra sociedad civil está conformada por numerosas organizaciones y redes de organizaciones sociales que pretenden actuar en el ámbito de lo público manteniendo su autonomía respecto a los grandes partidos.